

Salir pronto y de manera ordenada

Una propuesta para la transición desde el aislamiento nacional obligatorio

Resumen ejecutivo

1. Es necesario avanzar rápidamente en una apertura progresiva y ordenada de la cuarentena.

2. Una propuesta para salir del aislamiento forzoso tiene que buscar equilibrios entre los cuatro pilares para la convivencia social con la pandemia: el sanitario, el económico, el social y el institucional. No podemos encerrarnos en planteos excluyentes como "salud o economía", tenemos que tener un enfoque integral.

3. Después de relativizar la amenaza del COVID, el gobierno tomó una acertada decisión de contener el potencial crecimiento de los contagios, que contó con nuestro apoyo. Lo hizo sin calibrar adecuadamente las consecuencias económicas y sociales y las diferencias regionales. Asimismo, adoptó un modelo de decisión que vulnera el normal funcionamiento del Congreso y de la Justicia.

4. Necesitamos pasar de un enfoque de control político-sanitario de la población a uno de gestión social del riesgo, con una perspectiva integral de los efectos de las medidas que se toman en el plano sanitario sobre el resto de los pilares mencionados. La gravedad de la situación económica y social requiere ordenar la estrategia para los próximos meses. En este sentido, es imprescindible tratar a la brevedad el presupuesto nacional. Hemos apoyado la propuesta de reestructuración de la deuda externa y confiamos en que evitaremos el default, pero necesitamos una hoja de ruta clara y el presupuesto es una parte fundamental de ella.

5. Se necesita un plan para la transición y salida de la cuarentena. El plan puede ser revisado y las estrategias pueden ser modificadas, pero hay que empezar por tener una hoja de ruta que explicita criterios y orientaciones que acoten la incertidumbre. Por supuesto, este marco de incertidumbre nos obligará a ser lo suficientemente flexibles como para avanzar y retroceder de acuerdo a las características de la trayectoria de la epidemia.

6. Varias provincias y municipios están ensayando formas de apertura regulada con criterios razonables, mientras que otras mantienen pautas más rígidas. Muy probablemente haya una rápida generalización de la apertura regulada, por el efecto de demostración y por la evidencia del cansancio social ante la persistencia del aislamiento una vez que sus objetivos iniciales se cumplieron.

7. Varias lecciones pueden extraerse de las alternativas de salida de formas de aislamiento obligatorio ensayadas por otros países: están formuladas en fases, el gobierno nacional ofrece pautas precisas de orden general pero la instrumentación y definición de protocolos corresponde a estados subnacionales

y municipios, son sectoriales y zonales, segmentan por grupos de riesgo, son revisables, y están construidas sobre la base del testeo y la trazabilidad.

8. No es nuestra tarea diseñar un plan detallado, que compete a las autoridades ejecutivas de las diferentes jurisdicciones. Lo que sí debemos hacer es proponer unos criterios para orientar las decisiones operativas. Esos criterios generales son:

a. Distanciamiento social voluntario

Hay que sostener pautas generales de distanciamiento social compatibles con el funcionamiento de las actividades productivas y sociales. Es preciso seguir estrictamente las prácticas de higiene personal, utilizar barbijos adecuados, mantener distancias, evitar las grandes concentraciones, las medidas básicas que todos aprendimos a utilizar y que hay que mantener.

b. Aislamiento focalizado

Hay que procurar que algunos grupos específicos mantengan condiciones de aislamiento más estrictas, siguiendo criterios basados en factores de riesgo - problemas cardiovasculares, respiratorios, diabetes, etc.- y en la edad. Este aislamiento deberá ser sugerido, pero voluntario, confiando en el criterio de las personas.

c. Ampliación selectiva de la movilidad, con criterios geográficos, de riesgo sanitario y de sector y actividad

La ampliación de la movilidad deberá combinar diferentes criterios de segmentación: geográfica, demográfica, de riesgo sanitario y de sector y actividad. En la medida en que no hay una distribución amplia y generalizada de los contagios en todo el país y que existen controles de ingreso a las diferentes ciudades y pueblos, el criterio de segmentación geográfica es básico. Antes que medidas de alcance nacional y sectorial, es preciso partir de los territorios y tener un criterio prudente pero amplio en la reanudación de las actividades. Como señalamos en el punto previo, personas con factores de riesgos y mayores de 70 años requieren atención particular, con recomendación de mayor aislamiento. La segmentación por sector y actividad reviste complejidad en las regiones con mayor concentración de casos. Es preciso adoptar medidas adicionales de protección y de organización del trabajo, procurando que la mayor parte de las actividades se reanude a la brevedad.

d. Ampliación de la cantidad de tests

Es imprescindible aumentar la cantidad de tests, con diferentes finalidades. En todos los países que han controlado la epidemia, el nivel de positividad de las pruebas es de 1-3% -esto es, entre 1 y 3% de los tests realizados da positivo-. En Argentina es de 8-9%. Entonces para alcanzar 3% de positivos habría que hacer 33 veces más pruebas que casos detectados. Si en la última semana hubo cerca de 150

casos diarios, y hoy hacemos 2.000 test diarios, necesitamos llegar a 5.000 por día, calibrando este número según los casos para que siempre se mantenga ese mínimo de 3%.

Pero además debemos testear a las poblaciones de mayor riesgo en cárceles, geriátricos, villas y asentamientos, y sobre todo a los trabajadores de la salud, cuidadores y personal de seguridad en contacto con pacientes, ancianos institucionalizados o reclusos. Finalmente, testear con pruebas rápidas para estimar la seroprevalencia y el porcentaje de la población que va adquiriendo la infección, muchos de ellos en forma asintomática.

e. Efectividad en la detección de casos y contactos

¿Qué necesitamos para aumentar la efectividad en la detección de casos y contactos? Dadas las limitaciones que tenemos para hacer un despliegue tecnológico como China, Corea o Taiwán, una opción es crear en cada distrito equipos de "trazadores", responsables de rastrear todos los contactos de un caso lo antes posible. Como más de 50% de los contagios son por personas asintomáticas, es muy importante la detección inmediata. Si una persona infectada, habitualmente tiene un contacto estrecho con otras 30 personas en las 2 semanas previas, estos equipos debieran identificar al menos 50% de los contactos en menos de 3 días para aislarlos y bajar el R0 a menos de 1. Si para fin de mayo tuviéramos 1.000 casos nuevos reales por día, necesitaríamos 12.000 trazadores. Con 2.400 equipos conformados por 5 personas podríamos cubrir todos los casos en 3 días, que es el mínimo que se necesita. Si en lugar de 1.000 casos reales por día tuviéramos el doble, necesitaríamos 4.800 equipos con 24.000 trazadores al inicio. Como el AMBA sigue siendo el epicentro de la epidemia, 70% de los equipos debieran desplegarse en esta región. Con una rápida capacitación epidemiológica, podríamos movilizar a nuestros médicos y enfermeros, estudiantes de último año y agentes sanitarios para formar estos equipos.

f. Monitoreo de la pandemia: el esquema valvular intermitente.

Asumiendo la incertidumbre de esta situación inédita, habrá que apelar a un "esquema valvular intermitente". De acuerdo con algunos indicadores objetivos - como la tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos y la tasa de duplicación de casos y muertes- hay que monitorear la evolución de la epidemia con el fin de relajar o endurecer las intervenciones, hasta que llegue la vacuna.

Para el monitoreo adecuado de la pandemia hay que hacer un esfuerzo sistemático de mejora de la cobertura, de la calidad y del acceso a la información. La realización de tests a gran escala -de diferente tipo y con diferentes propósitos-, la utilización de tecnologías de la información y de seguimiento personal para el rastreo de casos e identificación de patrones de movilidad, y el relevamiento y comunicación de la información proveniente del sistema hospitalario tienen que integrarse en sistemas de información que permitan una lectura lo más ajustada posible de la evolución de los contagios y de la salud de los infectados. Esta información tiene que ser de amplio acceso público, preservando condiciones básicas de confidencialidad.

g. Aprendizaje social y responsabilidad ciudadana

Así como hubo un aprendizaje y ajustes durante la cuarentena nacional, también los habrá en la transición. Desde esta perspectiva, hay que manejarse con prudencia y sin alarmismos, apoyando las conductas adecuadas antes que enfatizando las incorrectas. Una enseñanza de la cuarentena ha sido el alto grado de disciplina social alcanzada. Sin duda el miedo a la enfermedad y el temor a las sanciones influyen, pero también hay un sentido de responsabilidad social que debe ser alentado.

h. Fortalecimiento de las capacidades de atención de los infectados

El objetivo de la cuarentena era estar mejor preparado para atender un pico de contagios, aprovechando el tiempo para fortalecer las capacidades de atención - salas, camas, personal de salud, camas de cuidados intensivos, insumos, respiradores. Hay que continuar con el trabajo de ampliación de las capacidades de atención de los infectados, para garantizar que los enfermos estén muy bien atendidos y el personal sanitario muy bien protegido.

i. Modificación del esquema de asesoramiento experto

En esta etapa, consideramos necesario pasar de un esquema de asesoramiento experto centrado en la infectología clínica a un enfoque multidisciplinario, con comités mixtos de expertos u otras formas de asesoramiento que den cuenta de la complejidad de cuestiones involucradas y de la necesidad de considerarlas en conjunto.

j. Seguimiento de los avances científicos

En el mundo, hay un enorme esfuerzo de investigación sobre el COVID-19, sobre desarrollo de vacunas y tratamientos. A mediados de abril se estaban desarrollando más de 79 vacunas y 124 tratamientos, con más de 1200 ensayos clínicos registrados y en curso. A mediano plazo, esto abre perspectivas auspiciosas, pero en el corto plazo no tendremos vacunas disponibles, sea porque los desarrollos todavía no están aprobados para ser utilizados, sea porque la escala de producción es insuficiente. Por lo tanto, nuestro horizonte -durante un período que no podemos razonablemente estimar- es de inexistencia de vacunas y de tratamientos eficaces. Asimismo, en todo el mundo hay un conocimiento práctico, derivado de la atención a los pacientes, que va cristalizando en protocolos y recomendaciones y en experiencia del personal de atención de la salud, que permite ir mejorando los tratamientos individuales.

El seguimiento en tiempo real de los avances científicos y de sus posibles implicancias sanitarias, de modo tal de ajustar medidas preventivas y tratamientos y de anticipar posibles escenarios de evolución de la pandemia es una condición básica para la estrategia sanitaria.



Salir pronto y de manera ordenada

Una propuesta para la transición desde el aislamiento nacional obligatorio

La experiencia de la cuarentena es inédita en la historia mundial y argentina. La suspensión de la gran mayoría de las actividades productivas y de las formas de sociabilidad y el aislamiento forzoso de la población son iniciativas sin antecedentes comparables. No tenemos experiencia sobre las consecuencias de la medida, pero no nos cabe duda de que serán muy serias.

Después de más de un mes y medio de cuarentena estricta, con muy pocas excepciones, consideramos imprescindible adoptar un plan de apertura progresiva que contribuya a normalizar la vida de los argentinos. No se tratará de un simple retorno a la situación previa: será más bien una normalidad condicionada. Pero el mantenimiento del estado de excepción de hecho, instaurado con la cuarentena, tiene costos sociales, económicos, institucionales y, también, sanitarios que, a esta altura, sobrepasan en mucho los beneficios del mantenimiento de la cuarentena.

Desde Juntos por el Cambio hemos apoyado el establecimiento de la cuarentena, entendiendo la necesidad de acompañar en la emergencia las decisiones del gobierno. A poco de andar, observamos problemas serios en el manejo institucional de la coalición gobernante y en algunas decisiones serias de política interna e internacional que se adoptaron en este último mes y medio. También fuimos señalando la necesidad de que se modificara el abordaje de la política con la cual afrontar la pandemia. Como somos plenamente conscientes del difícilísimo escenario económico que ya enfrentamos, dimos nuestro aval a la propuesta de negociación de la deuda, con el convencimiento de que lo peor que le puede pasar a la economía argentina es un default.

Creemos que en este momento es preciso iniciar una transición ordenada hacia una nueva y difícil normalidad. Esta transición no es un asunto puramente técnico. Por el contrario, en la medida en que se deben establecer compromisos entre valores y objetivos es que tendrá un carácter eminentemente político. La democracia supone una búsqueda de equilibrios y compromisos entre principios y valores, a través de la deliberación pública informada. Con esta perspectiva, desde la Unión Cívica Radical y con el apoyo técnico de la Fundación Alem procuramos aportar nuestras ideas y propuestas frente a una cuestión que debe ser una política de Estado y no solamente de una parcialidad política a cargo del gobierno.

1. Los equilibrios entre los cuatro pilares para la convivencia con el coronavirus

Una propuesta para salir del aislamiento forzoso tiene que buscar equilibrios entre los cuatro pilares para la convivencia social con la pandemia: el sanitario, el económico, el social y el institucional. Esta primera definición supone que vamos a vivir durante un período largo con el coronavirus. No sabemos cuánto durará, pero el retorno inmediato a la normalidad parece imposible hasta que no esté disponible una vacuna, para lo cual falta por lo menos un año. Por lo tanto, urge definir, en un contexto de alta incertidumbre, algunos puntos de consenso para transitar rápidamente de una situación de aislamiento social extremo a una de creciente normalidad.

Cada uno de los cuatro pilares involucra valores sustantivos que pueden estar en tensión pero que tienen que ser igualmente respetados. Las disyuntivas "salud o economía" o "salud o derechos individuales" son maneras inadecuadas de abordar problemas complejos, que en alguna coyuntura pueden resultar tentadoras para los gobiernos, pero que en poco tiempo revelan sus efectos no deseados.

La importancia del pilar sanitario se basa en la obligación política y social de cuidar de la vida y la salud de todos los habitantes del país. En una emergencia sanitaria esta obligación adquiere particular relevancia, y justifica esfuerzos extraordinarios, como los que están haciendo buena parte de los países del mundo. Hay que concentrar energías y recursos en enfrentar la amenaza, crear conciencia y llegar a imponer cambios radicales en las conductas sociales. Los sistemas de atención médica están siendo puestos a prueba y su personal enfrentado a situaciones de alta tensión y riesgo. La pandemia se convierte en un foco exclusivo de atención, al tiempo que se postergan otras enfermedades y crecen los problemas psico-sociales derivados del encierro.

Las medidas de aislamiento -de mayor o menor alcance- tomadas por la gran mayoría de los países han conducido de forma inmediata a un enorme derrumbe económico. El objetivo fundamental era ganar tiempo crítico para preparar al sistema de salud ante esta nueva contingencia y evitar su colapso, como ha ocurrido en muchos países, si la epidemia se desbordara. Sin embargo, el aplastamiento de la curva epidemiológica, exitoso desde lo sanitario, tuvo su correlato en el aplastamiento de la curva económica. Lo que se inició con una contracción drástica y generalizada de la oferta, muy rápidamente se está trasladando al empleo y a los ingresos, con posibles derivaciones sobre el sistema financiero. Las proyecciones de caída de niveles de actividad son inciertas, todas malas y algunas peores. Los gobiernos reaccionaron con rapidez, con un abanico de medidas dirigidas a sostener la producción, el comercio y el empleo. No obstante, se avizora un escenario de recesión profunda que en nuestro país se puede amplificar por las limitaciones estructurales y los desafíos previos a la pandemia. En este contexto, dos grandes temas requieren consideración: cómo

comenzar a recuperar niveles de actividad y cómo ayudar a sobrevivir a empresas para minimizar el impacto sobre el empleo privado (formal e informal).

La combinación del abrupto derrumbe económico y la prolongación del encierro tiene profundos impactos sobre el bienestar individual y colectivo, desde la angustia por el riesgo de la pérdida del empleo y los ingresos hasta las tensiones familiares y personales producto del encierro y el aislamiento. A medida que pasa el tiempo, se acentúan los impactos del congelamiento económico y crecen las preocupaciones, en todos los sectores de la sociedad. Para este pilar social, los desafíos son múltiples y acuciantes. Uno es fundamental: establecer un horizonte de previsibilidad elemental para normalizar la vida laboral, social y educativa.

Los tiempos de incertidumbre social y de miedos individuales pueden ser caldo de cultivo de liderazgos autoritarios. El sostenimiento escrupuloso de la institucionalidad democrática es un imperativo por el que tenemos que bregar. Este pilar institucional ha sido innecesariamente dañado por el gobierno, con un enfoque de concentración del poder inadecuado para hacer frente a la complejidad de la situación que vivimos hoy y que vamos a vivir en los próximos meses. La normalización del funcionamiento institucional, empezando por el Congreso y la administración de justicia es un objetivo insoslayable y no debe estar al arbitrio de ningún funcionario sino ser el resultado del cumplimiento estricto de la legalidad del estado democrático de derecho que se funda en la Constitución Nacional.

La emergencia sanitaria puede admitir limitar temporalmente solo algunos derechos y libertades de los ciudadanos, pero no la parálisis institucional y menos aún la contracción de la república. Las restricciones a las libertades personales sólo pueden admitirse temporalmente y con un estricto control del Congreso y del Poder Judicial. De allí que es urgente que ambos poderes funcionen plenamente.

2. Los cuatro pilares y la acción del gobierno de Alberto Fernández

¿Cómo actuó el gobierno argentino durante la pandemia del coronavirus en relación con estos cuatro pilares?

La primera consideración es que hubo una opción por establecer una cuarentena forzosa de alcance nacional por un período muy prolongado, sin una preocupación suficiente por los efectos económicos y sociales de la medida y con un injustificable avance sobre la institucionalidad. La cuarentena fue exitosa en aplastar el crecimiento de la curva de contagios, pero la falta de diversidad en las perspectivas de análisis y el sesgo en la formación de los asesores presidenciales no permitieron anticipar los efectos no sanitarios (psicológicos, económicos y sociales) y algunos sanitarios asociados que son muy significativos.

La cuarentena es una opción justificada en hipótesis sanitarias razonables que buscan evitar un brote descontrolado. El cumplimiento de las restricciones en la Argentina ha sido alto, evidenciando un importante nivel de conciencia y disciplina

social. Sin duda, hubo algunos episodios que tienen que ser tomados en cuenta, como el generado por la imprudente decisión de concentrar pagos a jubilados y beneficiarios de AUH. También es preciso reconocer que existen límites sociales al cumplimiento estricto, por ejemplo, aquellos derivados de condiciones de hacinamiento o de la necesidad imperiosa de trabajar. Veamos los cuatro pilares.

2.1. El pilar sanitario: de la relativización del problema a la cuarentena nacional estricta

Cuando apareció el coronavirus en la escena internacional, la reacción de las autoridades sanitarias y políticas argentinas fue relativizar su importancia y minimizar su impacto potencial sobre la Argentina. El ministro de salud tuvo varias definiciones públicas poco afortunadas, aludiendo a la lejanía de China y a los efectos del clima de verano sobre el virus, o a declaraciones sobre que lo que importaba y preocupaba era el dengue y no el coronavirus. Aún a principios de marzo, cuando ya los potenciales impactos de la pandemia no podían ser disimulados, las autoridades seguían sin darle demasiada importancia. Por ejemplo, el discurso presidencial del 1 de marzo no menciona el tema. Esta subestimación del problema no fue solamente en las declaraciones públicas. La morosidad en la gestión que caracterizó a los primeros meses de gobierno de Alberto Fernández se manifestó en la falta de previsión para hacer frente a los requerimientos sanitarios para enfrentar a la pandemia. Ello se evidenció en la baja compra de reactivos para el diagnóstico, elemento fundamental para conocer los niveles de infección de la población o en la falta de planes para preparar el sistema asistencial para atender una demanda potencial importante de infectados.

En pocos días, el coronavirus pasó de ser un tema relativamente lejano a convertirse en el centro de las preocupaciones sanitarias y políticas del país. El 4 de marzo apareció en la tapa de los diarios la noticia del primer infectado de coronavirus y el 8 de marzo la del primer muerto. A partir de ese momento el gobierno comenzó a tomar medidas de restricción de la circulación, empezando por los vuelos internacionales. La progresiva adopción de medidas para enfrentar a la crisis fue sin duda estimulada por la evolución de la epidemia en Italia y en España. Lo que había comenzado como un fenómeno inquietante pero lejano se encarnó en noticias e imágenes de una situación que amenazaba con descontrolarse en dos países social y culturalmente muy cercanos. El 14 de marzo España estableció una cuarentena; Italia la había comenzado cuatro días antes.

Después de idas y vueltas en los días previos, el domingo 15 el Presidente anunció una serie de medidas -cierre de fronteras, suspensión de clases, refuerzo de la AUH- hasta fin de marzo. El proceso se aceleró en la semana y el viernes 20, previa consulta con los gobernadores, el Presidente decretó el establecimiento de una cuarentena nacional desde el día siguiente hasta el 31 de marzo. La justificación, similar a la de otros países, se basó en la idea de aplanar la curva de contagios y evitar el colapso del sistema de atención médica, en anticipo de un pico de infecciones con la llegada del frío. A diferencia de otros países, la cuarentena se adoptó con una baja cantidad de infectados y de fallecidos.

Las medidas de aislamiento social obligatorio se mantienen hasta la actualidad, con prórrogas sucesivas y pequeñas ampliaciones de las actividades permitidas. Desde lo epidemiológico y sanitario, las medidas han dado el resultado esperado. No hubo ni hay desbordes en los hospitales o en las unidades de cuidados intensivos, los contagios son limitados, buena parte del país no está siendo afectado por la pandemia, hay una mejora -insuficiente- en la cantidad de tests que se realizan, se han ampliado los recursos sanitarios críticos para la atención de la epidemia, y se han incorporado prácticas de distanciamiento social y uso de tapabocas.

Un déficit muy importante -y al que queremos contribuir a subsanar con esta propuesta- es la falta de un plan de transición y salida, bien fundado y discutido, que se proporcione un horizonte de previsibilidad básica a toda la ciudadanía.

2.2. El pilar económico: falta de perspectiva estratégica y reacción lenta

Creemos que en la implementación de la cuarentena -y especialmente en la fase inicial de definición de su extensión-, hubo un problema grave de diseño y de falta de perspectiva estratégica por parte de las autoridades nacionales. Argentina ha sido uno de los países que tomaron las medidas más exigentes en términos sanitarios, puntualmente en la definición de la duración del confinamiento más estricto. Sin embargo, no solo se minimizaron y despreciaron sus costos económicos, sino que también se soslayaron las peores condiciones iniciales y el menor margen de acción con el que cuenta nuestro país, no solo si se lo compara con naciones desarrolladas, sino también con otros países emergentes o nuestros vecinos regionales.

El Gobierno no ha ponderado correctamente las limitaciones imperantes y el impacto económico al definir términos y alcances de la cuarentena. Mas aun, se ha observado una actitud indiferente ante las crecientes dificultades económicas, que incluso se confirma en varias declaraciones públicas del propio Presidente de la Nación.

A estos errores de planteo estratégico se sumaron errores en el diseño específico de las medidas y dificultades de implementación. En efecto, las iniciativas que mayor impacto económico han tenido hasta el momento están más concentradas en sostener la "demanda" y la protección social, mientras que ha sido muy demorada la ayuda a la producción y la oferta. Es necesario priorizar la protección de los sectores más vulnerables. Pero se tiene que atender también la situación del empleo y la producción para que la pobreza y el desempleo no se agraven. Transcurridos 45 días de la cuarentena, persisten las dificultades para que las empresas y trabajadores puedan acceder a los beneficios anunciados en una magnitud significativa. Entendemos que la magnitud de la crisis y las debilidades propias de nuestro Estado son elementos que dificultan la toma de decisiones y la adecuada implementación de las iniciativas, pero es también otro elemento que

refleja la minimización original que hizo el Gobierno sobre los efectos del coronavirus.

Aunque aún no hay información oficial agregada, las estadísticas preliminares permiten tener una idea del impacto que está teniendo la cuarentena sobre los efectos sobre la economía. Según una encuesta de la UIA, 72% de las empresas relevadas observan caídas de las ventas mayor a 60%, de un universo que comprende a compañías de actividades no exceptuadas y exceptuadas. La demanda de energía eléctrica industrial cayó 42% con respecto a los registros previos a la cuarentena y, en algunos sectores, las retracciones superan 60% y 70%. La recaudación tributaria nacional cayó 24% en términos reales en abril y algunos impuestos registraron incluso retracciones nominales, lo que muestra la magnitud del impacto de la cuarentena sobre la economía. El panorama en las provincias tiene un tono similar, con peculiaridades según los casos que denotan la gravedad de la cuestión. En efecto, hay que remontarse a la crisis de 2001/2002 para encontrar registros similares.

La dinámica de los acontecimientos recientes, la evaluación de las medidas oficiales y del mecanismo de toma de decisiones, los crecientes desafíos que enfrenta nuestra economía y, con ello, la necesidad imperiosa de salir inteligentemente de la cuarentena, requieren un cambio de estrategia que, en lo estrictamente económico, se debe fundar en los siguientes ejes.

En primer término, el Gobierno debe presentar el Presupuesto Nacional para explicar y explicitar su hoja de ruta. No se pueden discutir medidas aisladas sin una visión comprensiva de cómo se espera transitar los próximos meses. Evidentemente, la gran incertidumbre dificulta cualquier ejercicio de planificación, pero es indispensable contar con esta hoja de ruta para poder hacer una evaluación razonable de los logros y de los desvíos, y para delinear las eventuales medidas correctivas. A principios de año el gobierno justificó la ausencia de presupuesto en virtud de la negociación de la deuda. Ahora que la propuesta está hecha y existe una programación macroeconómica de mediano plazo implícita en la misma, no se entiende por qué ese diseño no se plasma en la letra detallada del Presupuesto.

Es crucial cerrar el proceso de reestructuración de la deuda pública bajo legislación internacional de una manera beneficiosa para nuestro país, evitando un nuevo default. No se deben minimizar los costos a corto, mediano y largo que un nuevo incumplimiento puede generar, no solo sobre el acceso al financiamiento voluntario para la Nación, sino también para las provincias y el sector privado. Durante esta transición, el Gobierno Nacional debe garantizar un mecanismo de asistencia financiera a las provincias que, entre otros factores, se base en parámetros objetivos de distribución jurisdiccional. Al tiempo que se gana claridad en el programa fiscal de corto plazo, el gobierno también necesita precisar cuál será su estrategia monetaria y financiera. Es comprensible que, ante la gravedad de la coyuntura, el Banco Central haya ofrecido la liquidez necesaria. Sin embargo, a su tiempo se impondrá un giro en esa trayectoria para evitar mayores descontrolados inflacionarios.

Por otra parte, no hay que detener el proceso de inserción de Argentina en el mundo y el involucramiento con los organismos internacionales, como el G20 y los organismos multilaterales -el papel de la Argentina en la OMS requerirá particular atención pública-. Se ha cometido un error grave en las negociaciones con el MERCOSUR y es urgente una corrección del rumbo. Hasta el momento los intentos han sido infructuosos. La recuperación económica de nuestro país estará en gran medida asociada a la apertura de nuevos mercados y en la generación de inversiones.

A nivel sectorial, se debe establecer una perspectiva diferente para cada rama de actividad y tamaño de empresa, teniendo en cuenta la posibilidad de adaptarse a las medidas de distanciamiento social y su capacidad por operar con un menor grado de interconexión del resto de los sectores.

2.3. El pilar social: contención focalizada y subestimación del impacto social

La decisión de impulsar una cuarentena nacional que abarcó a todos los territorios del país consiguió paralizar la vida social y ha tenido serias consecuencias. La primera de ellas es el inmediato impacto sobre el empleo: aumento de la desocupación, reducciones salariales y riesgo creciente de pérdida de empleos, sobre todo en el sector privado y en la economía informal. Los impactos no se circunscribieron a los asalariados, sino que han afectado a muchos trabajadores independientes. Estos impactos se agudizaron a medida que se extendió el plazo de la cuarentena y han generado una sensación justificada de preocupación y angustia en vastos sectores de la sociedad. La cuarentena no ha tomado con la consideración necesaria la condición laboral de muchos argentinos que no cuentan con ahorros, que no están en relación de dependencia, que dependen del funcionamiento del comercio y del transporte o que son empleados de pequeñas y medianas empresas sin capacidad para resistir la parada súbita de la economía.

La decisión de definir una cuarentena de alcance nacional generó situaciones de aislamiento a poblaciones que no se encontraban en riesgo inmediato de ser afectadas por la pandemia. El temor generado por la medida ha dado lugar a algunos comportamientos autoritarios de autoridades e individuos que han perseguido como si fueran traidores a personas que infringían o parecían infringir las reglas de la cuarentena.

La medida trató por igual a quienes corrían verdadero riesgo y a aquellos que no. La falta de focalización de las medidas llevó a que se tardara en considerar adecuadamente a poblaciones de riesgo, como quienes viven en geriátricos o en condiciones de encierro. El tratamiento de la situación carcelaria evidenció una falta de anticipación y un uso de la situación sanitaria de los detenidos con fines diferentes al preventivo. Además, en el caso de los detenidos no se ha coordinado una política con las provincias para la atención de la amenaza sanitaria en las cárceles.

Un problema que se ha ido agudizando en las últimas semanas es el de los efectos de la cuarentena sobre la salud de las personas y sobre el propio sistema de salud. Las restricciones a cierto tipo de intervenciones médicas -por ejemplo, cirugías programadas-, la dificultad para moverse y el temor a la concurrencia a hospitales ha conducido a una merma en la atención, que puede resultar en el deterioro de la condición de salud de importantes sectores de la población. En el caso del sistema de salud, a la situación de riesgo del personal se suma el impacto de la merma de ingresos, sobre todo para el segmento privado.

Pese a que el gobierno ha hecho gala de la creación del Ministerio de la Mujer este fue ignorado al momento de la declaración del aislamiento nacional obligatorio. El tratamiento igualitario de la población y el sesgo sanitarista del asesoramiento presidencial no permitió contemplar los efectos del encierro doméstico sobre mujeres y niños sujetos al abuso sexual y la violencia doméstica que quedaron a merced de sus victimarios. El incremento de demandas de auxilio a los servicios estatales es un claro indicador del olvido. De igual manera no se contempló la situación de infantes y adolescentes hijos de padres separados.

Desde nuestros bloques parlamentarios hemos trabajado intensamente para resolver la situación de los argentinos varados en el exterior y dentro del país, que han sido objeto de un maltrato inadmisibles, como si estar fuera de su lugar de residencia en el momento en que se adopta la decisión de la cuarentena los privara de derechos.

2.4. El pilar institucional: la tentación del centralismo autoritario

De la mano de la apelación a la necesidad de hacer frente a una emergencia sanitaria nacional, el gobierno de Alberto Fernández avanzó de manera injustificable sobre la institucionalidad argentina. Una cosa es reconocer la necesidad de que en condiciones de emergencia sanitaria se restrinjan derechos de movilidad o de reunión, otra, muy distinta, es congelar el funcionamiento del Congreso y de la Justicia, gobernar por la vía de decretos de necesidad y urgencia o tomar decisiones sin respaldo legal.

La limitación del funcionamiento del Congreso no ha estado determinada por ninguna consideración de riesgo sanitario: el Presidente decidió que la pandemia no era una cuestión de Estado sino de partido y, más que de partido, de facción. Por razones más funcionales que políticas, necesitó de un marco de acuerdo con los gobernadores. Pero, aún en ese caso, el Presidente ha distado de manejarse con la amplitud y generosidad que la situación requiere -como lo muestra el anuncio de movilidad de los chicos, no acordado con los gobernadores-.

El caso de la Justicia reviste particular gravedad. Desde el inicio, considerar que el servicio de Justicia no es una actividad esencial nos parece un despropósito. Pero lo más grave es que para lo único que ha funcionado es para atender a la agenda política del kirchnerismo duro, avalada por el Poder Ejecutivo: el levantamiento de las prisiones preventivas de los ex funcionarios kirchneristas y

las inexplicables excarcelaciones de presos comunes, sobre todo en la Provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, la Corte Suprema de Justicia tuvo que dictaminar sobre un requerimiento sin bases formulado por la vicepresidenta.

Un problema extremadamente serio que el gobierno nacional no está encarando de la manera adecuada -es decir, con reglas claras y manejo no discrecional- es el de la relación fiscal entre Nación, provincias y municipios. La abrupta caída de la actividad tiene un impacto directo sobre los ingresos fiscales nacionales, provinciales y municipales. Provincias y municipios no tienen capacidad de endeudarse ni posibilidad de emitir dinero, lo que sí puede hacer y está haciendo el gobierno nacional. Esta asimetría pone a provincias y municipios bajo el arbitrio del Poder Ejecutivo Nacional.

3. Una orientación para la transición: pasar del control político-sanitario de la población a la gestión social del riesgo

La evolución de la situación en las últimas semanas revela con claridad la necesidad de un cambio de enfoque en el abordaje para enfrentar la pandemia. No se trata solamente de criticar una decisión del gobierno o de proponer desde la oposición tal o cual medida concreta. Este cambio de enfoque puede ser planteado desde diferentes ángulos. Desde un punto de vista más técnico, hay que pasar del control político-sanitario de la población a la gestión social del riesgo. La combinación decisión gubernamental centralizada e imperativa, basada en recomendaciones epidemiológicas básicas -la cuarentena- tiene un límite, que, a nuestro juicio, ya ha sido alcanzado.

Alcanzar un consenso sobre los instrumentos para salir de la cuarentena nacional es imprescindible, y en la última sección de este documento se detallan criterios y sugerencias concretas. Pero sobre todo es necesario un acuerdo sobre algunos criterios sociales y culturales, lo que llamamos "recuperación del sentido común y la confianza social".

Cuando planteamos la necesidad de recuperar el sentido común es porque pensamos que se está perdiendo. Un ejemplo puede aclarar lo que queremos decir. En declaraciones públicas del 1 de mayo, Nicolás Kreplak, viceministro de Salud de la Provincia de Buenos Aires presentó como un logro que "cuando empezó la pandemia teníamos el 95 por ciento de las camas ocupadas. Ahora, producto de la cuarentena y de que se suspendieron las cirugías programadas y hay menos accidentes de tránsito, la ocupación de camas de terapia intensiva está por debajo del 30 por ciento", al tiempo que sostenía la necesidad de prolongar la cuarentena hasta después de las vacaciones. ¿No advierte el viceministro la irracionalidad de su planteo? ¿Para qué se estableció la cuarentena: para que el sistema de atención no colapsara o para que los hospitales se vaciaran de enfermos? ¿Cuántas muertes o procesos de agravamiento de enfermedades están ocurriendo sin que los registremos? La imagen que proporciona el viceministro es muy poderosa: todos

encerrados esperando un brote que no llega mientras las terapias intensivas están semivacías.

Lo que hace el viceministro es presentar de manera extrema lo que algunos han llamado el "enamoramamiento de la cuarentena". Una medida necesaria y exitosa en el corto plazo tiene inocultables beneficios políticos; la salida de esa medida conlleva riesgos sanitarios inevitables y daños políticos potenciales, por lo que los que las autoridades dudan en salir. A medida que pasa el tiempo, los costos sociales, económicos y sanitarios que estaban ocultos al principio empiezan a hacerse acuciantes. Pero el gobierno duda en cambiar de rumbo, entre otras cosas porque eligió una estrategia de gestión de la crisis que exalta la omnipotencia del poder central y teme que cualquier episodio de retorno de los contagios amenace todo el edificio político que construyó.

En esta lógica cerrada, se va perdiendo el sentido común. Y si no lo recuperamos colectivamente, lo que va a suceder es que tendremos un relajamiento de hecho de la cuarentena, basado en una multitud de decisiones individuales, basadas en juicios de riesgo y oportunidad que haga cada uno de los argentinos. Si en una ciudad mediana, sin casos nuevos hace un mes, se mantienen restricciones para poder salir a ganarse la vida, ¿hasta cuándo va a esperar un ciudadano? Si hace un mes y medio una familia con dos chicos está encerrada en un departamento de dos ambientes, ¿cuánto más va a aguantar? Si hace cuatro meses un paciente tenía programada una intervención quirúrgica para fin de marzo, ¿cuántos días más puede dejar pasar sin empeorar su cuadro? Si en países con situaciones muchísimo más graves se relajan progresivamente las restricciones, ¿por qué aquí todavía no? Los ejemplos y las preguntas pueden multiplicarse.

Recuperar el sentido común requiere también apostar por la confianza en los comportamientos sociales. Sabemos que la cuarentena se viene cumpliendo con un alto grado de disciplina social: nos quedamos en casa, salimos cuando nos dejan, usamos barbijos, nos lavamos obsesivamente las manos, mantenemos la distancia de rigor. Al mismo tiempo, diferentes voces alarmistas sostienen que cualquier relajación de la cuarentena es la antesala de una especie de caos que, sin embargo, nuestro comportamiento durante la pandemia desmiente.

En un reportaje publicado el 1 de mayo, Peter Ratcliffe, Premio Nobel de Medicina, después de señalar la importancia de reconocer los límites de nuestro conocimiento sobre el coronavirus y la necesidad de comunicar claramente lo que sabemos, sin hacer predicciones categóricas, afirma que cree "que el público puede sobrellevar las noticias malas y un nivel de incertidumbre". En buena medida, de eso se trata: tenemos un problema común, sobre el que no sabemos lo suficiente y tenemos que enfrentarlo en común, asumiendo la incertidumbre y actuando con responsabilidad individual y social.

4. La responsabilidad del gobierno: de la mesa chica a la mesa grande

Los argumentos previos sugieren que el cambio de enfoque que proponemos implica una modificación en el modo en que el gobierno nacional enfrenta la pandemia y sus impactos. El gobierno ha elegido un modo de llevar adelante la política para enfrentar la crisis que le puede haber dado beneficios de imagen en el corto plazo, pero que es inadecuado para gobernar la complejidad de la crisis en la que vamos a vivir durante largo tiempo.

4.1. La mesa política: diálogo y acuerdo político y social

Como señalamos al comienzo, la democracia supone la construcción de acuerdos que permitan abordar los desafíos comunes de nuestra sociedad. Los problemas que enfrentamos son complejos, no admiten soluciones simples y requieren esfuerzos muy serios para encontrar las mejores soluciones. La crisis que estamos atravesando, por su magnitud y sus características, altera parámetros básicos de la organización económica, social e institucional, que tememos que el gobierno no esté calibrando adecuadamente. Vamos a experimentar una caída profunda del nuestro PBI, con un aumento del desempleo, caída de los ingresos de las familias, sectores enteros de la economía colapsados e impactos fiscales inmediatos. Y vamos a tener que enfrentar esos problemas con muy escasa espalda fiscal y monetaria y en un contexto global recesivo.

Con esta sombría perspectiva de la economía argentina, Juntos por el Cambio decidió apoyar la propuesta de reestructuración de la deuda externa presentada por el gobierno. La peor noticia económica para los próximos años de la Argentina sería entrar en default. Por lo tanto, alentamos todos los esfuerzos para llegar a un acuerdo.

Es imprescindible aprobar el presupuesto nacional. Así como sugerimos algunas ideas para una transición sanitaria ordenada, consideramos imprescindible reclamar que el gobierno presente a la brevedad el proyecto de Ley de Presupuesto. No se trata solamente de una obligación constitucional: es la herramienta básica para proporcionar un marco de referencia para todas las actividades del país. Sabemos que en los próximos meses vamos a tener múltiples demandas sobre los recursos públicos. La mayoría de esas demandas serán legítimas, ¿cuál es el criterio general para decidir cómo abordarlas? ¿De dónde van a salir los recursos? ¿Cuánto vamos a poder emitir sin poner en riesgo nuestra frágil macroeconomía? ¿Cómo se va a manejar la relación con las provincias? Para contestar éstas y muchas otras preguntas hace falta un presupuesto nacional, que comunique a la ciudadanía cuáles son las prioridades gubernamentales y cómo vamos a enfrentarlas.

Suponer que la Argentina va a afrontar una crisis económica y social de la magnitud de la que estamos viviendo a golpes de DNU, de asignaciones discrecionales de partidas presupuestarias y emisión monetaria no es solamente un abuso de autoridad, es una garantía de crecientes problemas de gobierno y de gestión. Como lo señalamos varias veces, es un momento en el que la recurrida figura de un acuerdo económico y social puede ser de suma utilidad.

A diferencia de otros momentos, en los que los actores políticos y sociales no quieren concertar porque no están seguros de qué es lo que van a ganar o perder, hoy todos sabemos que todos perdimos y que hay que ponerse de acuerdo en cómo salir, del modo más ordenado y rápido posible.

Nadie discute la necesidad de un importante nivel de centralización de decisiones para enfrentar la pandemia. Es obvio también que el nuestro es un país federal y que hay diferencias regionales relevantes que es preciso integrar en el diseño y en la ejecución de las medidas. Es inevitable que en contextos de emergencia tienda a producirse una concentración de autoridad, pero el nuestro es un país federal, en el que la gestión de los sistemas públicos de salud es responsabilidad de las provincias y eso requiere concertación permanente. Más serio aún es el impacto de la crisis económica sobre las finanzas provinciales. En un escenario de caída de los ingresos fiscales, el financiamiento provincial asociado a la recaudación impositiva se va a derrumbar y, como se señaló previamente, las provincias no pueden emitir ni están hoy en condiciones de endeudarse. Por lo tanto, es preciso establecer reglas claras de asistencia financiera a las provincias, que requieren sanción legislativa.

La responsabilidad de gobernar es del Frente de Todos. Pero hay cuestiones que deberían trascender la mirada de corto alcance de una gestión particular. Uno de esos temas es el de la inserción de la Argentina en el mundo, donde sabemos que hay diferencias de enfoque, pero se deben buscar convergencias. Los desafortunados episodios del retiro de la mesa de negociaciones del MERCOSUR o de la injerencia en la política interna chilena son síntomas preocupantes de una tendencia aislacionista.

No esperamos que el Frente de Todos haga suya nuestra visión de una Argentina integrada y abierta al mundo. Lo que sí aspiramos es a contribuir a que en la salida de la crisis dejemos de lado posiciones aislacionistas. No solamente porque vamos a necesitar sostener nuestras exportaciones en un mundo complicado, sino sobre todo porque nuestro país tiene que ser un participante activo en las discusiones internacionales sobre el ordenamiento económico internacional que van a comenzar a plantearse. Estamos en el MERCOSUR y en el G20: no son ámbitos menores, fortalezcamos nuestra presencia con posiciones reflexionadas y constructivas.

4.2. La mesa técnica: la necesidad de ampliar las miradas

El Presidente ha elegido asesorarse por un pequeño grupo de médicos, en su mayoría infectólogos clínicos, que han sugerido o apoyado las medidas de aislamiento social obligatorio, con una fuerte reticencia a flexibilizar su aplicación. Este esquema de asesoramiento nos parece insuficiente. Reconocemos las credenciales profesionales de los expertos, pero pensamos que se requieren miradas complementarias que permitan abordar la diversidad de dimensiones de la pandemia.

La decisión reciente del presidente del Gobierno español sirve de ejemplo de lo que estamos planteando. En la primera etapa de la pandemia, Pedro Sánchez se asesoró con un grupo pequeños de especialistas médicos -aunque con un perfil más amplio que el argentino-. En la actualidad, ese esquema de asesoramiento cambió: la comisión de expertos que funciona bajo la coordinación del ministro de ciencia español está integrada por especialistas en salud pública, ciencia política, epidemiología, derecho, filosofía, historia, estadística aplicada a la medicina, diplomacia, economía, cardiología, bioestadística, astrofísica y big data e inteligencia artificial.

La razón de este cambio -que es el que sugerimos para nuestro país- es transparente: la complejidad de los problemas que enfrentamos requiere una pluralidad de perspectivas. Si no existe esta pluralidad, las visiones, los temas que hay que considerar y las prescripciones de política para adoptar se sesgan hacia las perspectivas disciplinarias de los que asesoran. Desde esta perspectiva, diputados de Juntos por el Cambio han presentado un proyecto de ley sobre Creación del consejo de expertos en emergencia sanitaria COVID-19, que recoge estos criterios. La amplitud de la mesa técnica -que, por otra parte, no tiene por qué limitarse a un grupo de expertos asesores de la Presidencia- es muy importante: en la medida en que la transición supone compromisos entre lo que hemos denominado los cuatro pilares, la discusión científica y técnica tiene que incorporar especialistas que tengan conocimiento y enfoques sobre cada uno de ellos.

Existe en el Estado argentino una instancia técnica y administrativa para el abordaje de este tipo de situaciones: el Sistema Nacional Para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil (SINAGIR), institucionalizado por la ley 27.287, aprobada por unanimidad en 2016. El sistema tiene por finalidad integrar y articular a todos los organismos nacionales, provinciales, de la CABA y municipales; a las organizaciones no gubernamentales y de la sociedad civil para el manejo de crisis y la recuperación. A pesar de que es la instancia legalmente indicada, que permite un abordaje interinstitucional e interjurisdiccional integrado, no ha tenido ningún papel relevante en esta crisis.

5. Se necesita un plan para la transición y salida de la cuarentena

Es imprescindible y urgente trazar un plan que reconozca que vamos a vivir en una situación de alta incertidumbre y de suma gravedad en el plano económico y social, pero que proporcione una guía, lo más clara posible, para la acción colectiva e individual. El plan puede ser revisado y las estrategias pueden ser modificadas, pero hay que empezar por tener una hoja de ruta que explicita criterios y orientaciones que acoten la incertidumbre. Tenemos que convivir con la incertidumbre del coronavirus, no deberíamos agregarle la derivada de la arbitrariedad de las decisiones políticas. Por supuesto, este marco de incertidumbre nos obligará a ser lo suficientemente flexibles como para avanzar y retroceder de acuerdo a las características de la trayectoria de la epidemia.

Varias provincias y municipios están ensayando formas de apertura regulada con criterios razonables, mientras que otras mantienen pautas más rígidas. Muy probablemente haya una rápida generalización de la apertura regulada, por el efecto de demostración y por la evidencia del cansancio social ante la persistencia del aislamiento una vez que sus objetivos iniciales se cumplieron.

En el plano sanitario, podemos adaptar los criterios básicos de los países donde la pandemia ha impactado más tempranamente. Sin duda, no tenemos los recursos económicos, organizacionales y tecnológicos de muchos de ellos, pero no podemos pensar que por esa razón estamos limitados a alternativas muy elementales de gestión epidemiológica como la cuarentena nacional. Tenemos que compartir criterios y aplicarlos con nuestros instrumentos, aprovechando que tuvimos éxito en la contención de la epidemia. Los objetivos son sencillos: mantener formas selectivas de distanciamiento social que limiten la expansión del COVID-19 por encima de las capacidades de atención del sistema de salud, poner en marcha a la economía y normalizar en lo posible la vida cotidiana.

Varias lecciones pueden extraerse de las alternativas de salida de formas de aislamiento obligatorio ensayadas por otros países: están formuladas en fases, el gobierno nacional ofrece pautas precisas de orden general pero la instrumentación y definición de protocolos corresponde a estados subnacionales y municipios, son sectoriales y zonales, segmentan por grupos de riesgo, son revisables, y están construidas sobre la base del testeo y la trazabilidad.

No es nuestra tarea diseñar un plan detallado, que compete a las autoridades ejecutivas de las diferentes jurisdicciones. Lo que sí debemos hacer es proponer unos criterios para orientar las decisiones operativas. Esos criterios generales son:

a. Distanciamiento social voluntario

Hay que sostener pautas generales de distanciamiento social compatibles con el funcionamiento de las actividades productivas y sociales. Es preciso seguir estrictamente las prácticas de higiene personal, utilizar barbijos adecuados, mantener distancias, evitar las grandes concentraciones, las medidas básicas que todos aprendimos a utilizar y que hay que mantener.

b. Aislamiento focalizado

Hay que procurar que algunos grupos específicos mantengan condiciones de aislamiento más estrictas, siguiendo criterios basados en factores de riesgo - problemas cardiovasculares, respiratorios, diabetes, etc.- y en la edad. Este aislamiento deberá ser sugerido, pero voluntario, confiando en el criterio de las personas.

c. Ampliación selectiva de la movilidad, con criterios geográficos, de riesgo sanitario y de sector y actividad

La ampliación de la movilidad deberá combinar diferentes criterios de segmentación: geográfica, demográfica, de riesgo sanitario y de sector y actividad.

En la medida en que no hay una distribución amplia y generalizada de los contagios en todo el país y que existen controles de ingreso a las diferentes ciudades y pueblos, el criterio de segmentación geográfica es básico. Antes que medidas de alcance nacional y sectorial, es preciso partir de los territorios y tener un criterio prudente pero amplio en la reanudación de las actividades. Como señalamos en el punto previo, personas con factores de riesgos y mayores de 70 años requieren atención particular, con recomendación de mayor aislamiento. La segmentación por sector y actividad reviste complejidad en las regiones con mayor concentración de casos. Es preciso adoptar medidas adicionales de protección y de organización del trabajo, procurando que la mayor parte de las actividades se reanude a la brevedad.

d. Ampliación de la cantidad de tests

Es imprescindible aumentar la cantidad de tests, con diferentes finalidades. En todos los países que han controlado la epidemia, el nivel de positividad de las pruebas es de 1-3% -esto es, entre un 1 y un 3% de los tests realizados da positivo-. En Argentina es de 8-9%. Entonces para alcanzar 3% de positivos habría que hacer 33 veces más pruebas que casos detectados. Si en la última semana hubo cerca de 150 casos diarios, y hoy hacemos 2.000 test diarios, necesitamos llegar a 5.000 por día, calibrando este número según los casos para que siempre se mantenga ese mínimo de 3%.

Pero además debemos testear a las poblaciones de mayor riesgo en cárceles, geriátricos, villas y asentamientos, y sobre todo a los trabajadores de la salud, cuidadores y personal de seguridad en contacto con pacientes, ancianos institucionalizados o reclusos. Finalmente, testear con pruebas rápidas para estimar la seroprevalencia y el porcentaje de la población que va adquiriendo la infección, muchos de ellos en forma asintomática.

e. Efectividad en la detección de casos y contactos

¿Qué necesitamos para aumentar la efectividad en la detección de casos y contactos? Dadas las limitaciones que tenemos para hacer un despliegue tecnológico como China, Corea o Taiwán, una opción es crear en cada distrito equipos de "trazadores", responsables de rastrear todos los contactos de un caso lo antes posible. Como más de 50% de los contagios son por personas asintomáticas, es muy importante la detección inmediata. Si una persona infectada, habitualmente tiene un contacto estrecho con otras 30 personas en las 2 semanas previas, estos equipos debieran identificar al menos 50% de los contactos en menos de 3 días para aislarlos y bajar el R0 a menos de 1. Si para fin de mayo tuviéramos 1.000 casos nuevos reales por día, necesitaríamos 12.000 trazadores. Con 2.400 equipos conformados por 5 personas podríamos cubrir todos los casos en 3 días, que es el mínimo que se necesita. Si en lugar de 1.000 casos reales por día tuviéramos el doble, necesitaríamos 4.800 equipos con 24.000 trazadores al inicio. Como el AMBA sigue siendo el epicentro de la epidemia, 70% de los equipos debieran desplegarse en esta región. Con una rápida capacitación epidemiológica, podríamos movilizar a nuestros médicos y enfermeros, estudiantes de último año y agentes sanitarios para formar estos equipos.

f. Monitoreo de la pandemia: el esquema valvular intermitente.

Asumiendo la incertidumbre de esta situación inédita, habrá que apelar a un “esquema valvular intermitente”. De acuerdo con algunos indicadores objetivos - como la tasa de ocupación de camas de cuidados intensivos y la tasa de duplicación de casos y muertes- hay que monitorear la evolución de la epidemia con el fin de relajar o endurecer las intervenciones, hasta que llegue la vacuna.

Para el monitoreo adecuado de la pandemia hay que hacer un esfuerzo sistemático de mejora de la cobertura, de la calidad y del acceso a la información. La realización de tests a gran escala -de diferente tipo y con diferentes propósitos-, la utilización de tecnologías de la información y de seguimiento personal para el rastreo de casos e identificación de patrones de movilidad, y el relevamiento y comunicación de la información proveniente del sistema hospitalario tienen que integrarse en sistemas de información que permitan una lectura lo más ajustada posible de la evolución de los contagios y de la salud de los infectados. Esta información tiene que ser de amplio acceso público, preservando condiciones básicas de confidencialidad.

g. Aprendizaje social y responsabilidad ciudadana

Así como hubo un aprendizaje y ajustes durante la cuarentena nacional, también los habrá en la transición. Desde esta perspectiva, hay que manejarse con prudencia y sin alarmismos, apoyando las conductas adecuadas antes que enfatizando las incorrectas. Una enseñanza de la cuarentena ha sido el alto grado de disciplina social alcanzada. Sin duda el miedo a la enfermedad y el temor a las sanciones influyen, pero también hay un sentido de responsabilidad social que debe ser alentado.

h. Fortalecimiento de las capacidades de atención de los infectados

El objetivo de la cuarentena era estar mejor preparado para atender un pico de contagios, aprovechando el tiempo para fortalecer las capacidades de atención -salas, camas, personal de salud, camas de cuidados intensivos, insumos, respiradores). Hay que continuar con el trabajo de ampliación de las capacidades de atención de los infectados, para garantizar que los enfermos estén muy bien atendidos y el personal sanitario muy bien protegido.

i. Modificación del esquema de asesoramiento experto

En esta etapa, consideramos necesario pasar de un esquema de asesoramiento experto centrado en la infectología clínica a un enfoque multidisciplinario, con comités mixtos de expertos u otras formas de asesoramiento que den cuenta de la complejidad de cuestiones involucradas y de la necesidad de considerarlas en conjunto.

j. Seguimiento de los avances científicos

En el mundo, hay un enorme esfuerzo de investigación sobre el COVID-19, sobre desarrollo de vacunas y tratamientos. A mediados de abril se estaban desarrollando más de 79 vacunas y 124 tratamientos, con más de 1200 ensayos clínicos registrados y en curso. A mediano plazo, esto abre perspectivas auspiciosas, pero en el corto plazo no tendremos vacunas disponibles, sea porque los desarrollos todavía no están aprobados para ser utilizados, sea porque la escala de producción es insuficiente. Por lo tanto, nuestro horizonte -durante un período que no podemos razonablemente estimar- es de inexistencia de vacunas y de tratamientos eficaces. Asimismo, en todo el mundo hay un conocimiento práctico, derivado de la atención a los pacientes, que va cristalizando en protocolos y recomendaciones y en experiencia del personal de atención de la salud, que permite ir mejorando los tratamientos individuales.

El seguimiento en tiempo real de los avances científicos y de sus posibles implicancias sanitarias, de modo tal de ajustar medidas preventivas y tratamientos y de anticipar posibles escenarios de evolución de la pandemia es una condición básica para la estrategia sanitaria.



La Fundación Alem es la organización oficial de la Unión Cívica Radical dedicada al análisis de los problemas públicos argentinos, la formación política de los miembros del partido y la promoción de los valores democráticos de la tolerancia y la paz.